

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 29° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-17820-2023
CARATULADO : HANNA/FISCO DE CHILE (MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO)

Santiago, veintinueve de Abril de dos mil veinticuatro

VISTOS:

Alberto Espinoza Pino y Marta de la Fuente Olguín, abogados, domiciliados en Luis Thayer Ojeda N° 1737, depto. 32, Providencia, y en Simón Bolívar N° 8800, La Reina, respectivamente, en representación de Víctor Guillermo Hanna Ruz, médico, domiciliado en calle Capitán Orella N° 2730, Ñuñoa, deducen demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4, Santiago.

Exponen que en el marco de las violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos acontecidas a partir del 11 de septiembre de 1973, el demandante, Víctor Guillermo Hanna Ruz, quien al momento de ocurrencia de los hechos se desempeñaba en el cargo de Subdirector Médico del Hospital Sótero del Río de Puente Alto, fue detenido el día siguiente del quiebre institucional, vale decir, el 12 de septiembre de 1973, por funcionarios de Carabineros, quienes lo llevaron en un vehículo policial al Regimiento de Puente Alto.

Citan parte de la declaración de los hechos que hace su representado, quien indica que fue advertido por los militares de la severidad con que estaban actuando, al punto que le habrían comentado que ya habían fusilado a cuatro personas. Señalan que también le habrían dicho que en caso de desorden, atentados o huelga en el Hospital, él sería directamente responsable, siendo arrestado y probablemente fusilado.

Continúan el relato de su representado, advirtiendo que se mantuvo trabajando en el servicio de medicina desde el 13 hasta el 16 de septiembre, cuando se levantó el toque de queda y pudo volver a su hogar. Relata que al día



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

siguiente, el 17 de septiembre de 1973, fue arrestado por dos individuos armados con metralletas, identificándose como funcionarios de la Policía de Investigaciones, todo lo anterior, mientras se encontraba atendiendo a un paciente.

Señalan que el sr. Hanna Ruz fue trasladado junto a otros dos médicos al Cuartel de Investigaciones de Puente Alto, lugar que asemeja a un terreno de fútbol, rodeado de alambradas, donde ya se encontraba una cuarentena de personas, aparentemente en las mismas condiciones.

Explican -volviendo al relato- que el campo se encontraba rodeado por un contingente de soldados armados que les impedían comunicarse entre ellos o desplazarse más de un par de metros, agregando que durante todo este tiempo no tuvieron acceso a líquidos ni comida, situación que se mantuvo hasta el anochecer, cuando fueron conducidos a un vagón de ferrocarril previsto para ganado, donde los hicieron entrar y sentarse.

Exponen que según su relato, debido a la gran cantidad de personas que había en el lugar, quedaron prácticamente unos sobre otros, permaneciendo en ese lugar por un par de horas, hasta que se produjo un incidente con una persona mentalmente inestable, que mordió la oreja de otro individuo, llegando los militares, quienes se llevaron al agresor, a quien habrían golpeado e insultado.

Adicionan que su representado fue amarrado en las muñecas y llevado en bus al Estadio Nacional, recinto deportivo donde –según describe- se escuchaban muchos gritos y órdenes, teniendo la impresión de que se trataba de personas que estaban siendo llevadas para ser torturados o eliminadas. Refiere haber sido golpeado por un soldado con la culata de su arma y haber perdido el conocimiento por una baja de presión. Cuenta episodios de convivencia con otros detenidos durante dicho período.

Acto seguido, continúan con la versión del sr. Hanna Ruz, señalando que después de la primera semana habrían comenzado los interrogatorios, siendo trasladados en varias oportunidades al Velódromo del Estadio, donde estuvo vendado, desnudo y recibió culatazos y golpes en todo el cuerpo al no saber responder a las preguntas. Explican, además, que lo habrían hecho firmar con los ojos vendados una declaración.

También refiere haber presenciado cómo llevaban a otras personas de un lugar a otro, desnudos, golpeados y, en general, en malas condiciones, incluidas algunas mujeres. Al cabo de un mes en esas condiciones, cuenta que fue



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

notificado junto a otros detenidos de que podía regresar a su casa, aunque con la obligación de presentarse a su lugar de trabajo el día siguiente, sin inmiscuirse en política.

Indican -siempre respecto de su representado- que eso fue justamente lo que hizo, pero que el nuevo director del Hospital, dr. Pizarro, le informó que no podía seguir trabajando en dicha institución y que debía buscar otros establecimientos que lo aceptaran.

Postulan que su representado habría recibido información de parte de ex vecinos de que su casa en La Florida había sido allanada.

Asimismo, que todo este ambiente de inseguridad y el estar sin trabajo lo habrían motivado a pedir asilo junto a su familia en la Embajada de Italia, petición que habría sido aceptada. Expresan que permaneció alrededor de un mes en dicha legación diplomática, recibiendo el mes siguiente un salvoconducto para abandonar el país junto a su familia.

Refieren antecedentes de cómo el sr. Hanna Ruz finalmente fue aceptado en Suiza como refugiado político, luego de realizar gestiones en el Consulado Suizo en Roma, destacando que ingresó a dicho país en febrero de 1974, donde eventualmente empezó a trabajar.

Señalan que esta persona manifiesta haber sufrido en el año 1975 una crisis de taquicardia, que después fue diagnosticada como crisis de pánico, probablemente por un trauma previo.

Explican que en 1978, su representado fue informado de que en virtud de la Ley de Amnistía dictada en Chile, tenía derecho a acogerse a ella y volver al país, iniciando los trámites para ello. Sin embargo, haber recibido esa noticia le habría causado problemas internos en su familia, ya que empezó a ser responsabilizado de haber tenido que abandonar el país.

Narran otros acontecimientos verificados en el periodo que estuvo en Europa, como el nacimiento de su tercera hija en 1980, quien tuvo problemas de nacionalidad, poniendo en relieve que en 1983 decidió volver a Chile, estando solo su nombre -no el de su familia- en la lista de personas autorizadas para regresar, decisión que habría provocado un quiebre definitivo con su cónyuge.

Finalmente, detallan su progreso laboral a partir del año 1984, cuando se autorizó el regreso de su ex esposa e hijos. Agregan que se acogió a la jubilación en abril de 2018, con casi 78 años, denunciando que al no haber cotizado



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

efectivamente durante el período que denuncia, se vio obligado a seguir trabajando hasta esa avanzada edad.

Concluyen haciendo un resumen de las afectaciones padecidas.

En cuanto a los fundamentos de derecho, indica que como consecuencia directa de la detención y tortura de la que su representado fue víctima, sumado al exilio y prohibición de ingreso a Chile, se desprendería inequívocamente un perjuicio tanto psíquico como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile, que debe ser reparado.

En cuanto al daño moral y su prueba, señalan que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio, en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado.

Respecto a la obligación de reparar por parte del Estado de Chile, indican que los hechos descritos configuran graves violaciones a los Derechos Humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, como tortura y persecución. En este caso se habrían vulnerado todos aquellos instrumentos de carácter internacional que consagran el derecho a la vida y la integridad personal, por lo que el deber de reparación debería abordarse desde una perspectiva doble, por el carácter de estos hechos ilícitos, que causan daño como crímenes de trascendencia internacional.

Así, plantean que el derecho internacional establecería que: “todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de éste”, constituyendo un hecho ilícito del Estado cuando una acción u omisión le es atribuible y se trata de una violación a una obligación internacional, teniendo dicho comportamiento el efecto de crear el deber de reparación. También hacen referencia a la responsabilidad del Estado en nuestra Constitución Política, refiriéndose específicamente al artículo 38 inciso 2°, entre otras disposiciones.

Luego sostienen la imprescriptibilidad de las acciones que emanan de la comisión de crímenes contra la humanidad, concluyendo que en el caso de marras concurren todos los elementos para reparar e indemnizar, en concordancia con la magnitud y el tipo de delito del que fue víctima, esto es, la existencia de una acción u omisión de un órgano del Estado, la existencia de un daño y un nexo causal, sin existir causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

Insertan un listado de diversa jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, desde 2019 hasta 2023, para fundar su postura.

Piden se acoja la demanda y se condene al Estado de Chile a pagar al demandante, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de \$300.000.000, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda, o la suma que el Tribunal estime, con costas.

Con fecha 26 de octubre de 2023 se notifica la demanda.

Con fecha 17 de noviembre de 2023 el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda.

Alega la excepción de reparación integral, toda vez que la demanda sería improcedente, porque el actor ya habría sido indemnizado. Reflexiona acerca del marco general de los resarcimientos ya otorgados y la complejidad reparatoria, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del entonces Presidente Patricio Aylwin, en lo que respecta a la justicia transicional, fueron los siguientes: "a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y, c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse". En lo relacionado con el segundo objetivo, plantea que la Comisión Verdad y Reconciliación o "Comisión Rettig", formuló en su informe final una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dice que dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el sr. Presidente de la República envió al H. Congreso, que luego se convertiría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas". Por su parte y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, precisa que el ejecutivo, siguiendo el informe de la Comisión, entendió por reparación: "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe".

Agrega que a dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas".



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

Concluye que la compensación de daños morales y la mejora patrimonial son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Asimismo, que una vez asumida esta idea resarcitoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, que explican cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional, según asevera.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones: i) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; ii) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, iii) reparaciones simbólicas.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, manifiesta que diversas leyes la habrían establecido, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre de 2019, en concepto de: a) pensiones, la suma de \$247.751.547.837, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123 (Comisión Rettig); b) pensiones por \$648.871.782.936, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech); c) bonos por \$41.910.643.367, asignados por la Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y otros \$23.388.490.737 por la referida Ley N° 19.992; d) desahucios (bono compensatorio) por la suma de \$1.464.702.888, asignados por medio de la Ley N° 19.123; y, e) bono extraordinario (Ley N° 20.874) por la suma de \$23.388.490.737. En consecuencia, al mes de diciembre de 2019 el Fisco habría desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Luego de referirse a las otras formas de reparación implementadas, sostiene en materia de identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas, que de todo lo expresado podría concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de Derechos Humanos no solo han cumplido los estándares internacionales de justicia transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera. Por tanto, considerando que la acción se basa en los mismos hechos y se pretende con ella se indemnicen los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de pago, por haber sido indemnizadas las demandantes en conformidad a la leyes N° 19.123 y 19.980.

A continuación, opone la excepción de prescripción extintiva, que funda, en síntesis, en que según lo que se expuso en la demanda, la detención ilegal y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

tortura que sufrió el actor tuvo lugar desde el día 12 de septiembre del año 1973. Agrega que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, sino hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, al 26 de octubre de 2023, había transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

Alega la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma legal y, en subsidio, la excepción de prescripción de 5 años del artículo 2515, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la notificación, igualmente transcurrió con creces el plazo legal.

Sobre el particular, indica que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles y que, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, que en este caso no existe. En el mismo sentido, considera que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Recuerda que la prescripción es una institución universal y de orden público, manifestando que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil que la consagran y, en especial, de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general, para todo el ordenamiento jurídico y no solo para el ámbito privado. Posteriormente, dice que la jurisprudencia existente en la materia, citando fallos de la Excma. Corte Suprema que a su entender tendrían aplicación para el caso, no otorgarían a la indemnización de perjuicios, cualquiera sea su origen o naturaleza, un carácter sancionatorio, de modo que jamás puede de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, por ser su contenido netamente patrimonial. Así planteado, postula que no debe sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Asegura que la imprescriptibilidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos no contempla las acciones civiles derivadas de los delitos o crímenes de lesa humanidad ni prohíbe o impide la aplicación del derecho interno.

Por último, plantea que el monto pedido sería excesivo, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia, que habrían actuado con mucha prudencia. En subsidio, señala que respecto a la regulación del daño moral



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

debe considerarse los pagos ya recibidos de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación N°19.123 y 19.980.

Alega la improcedencia del pago de intereses y reajustes.

Con fecha 22 de noviembre de 2023 la parte demandante evacúa la réplica.

Reiteran todos los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la demanda y añaden que el Consejo de Defensa no discutió la condición de víctima de delito de lesa humanidad de su representado, ilícito cometido por agentes del Estado.

En cuanto a la improcedencia de la indemnización alegada, por haber sido indemnizado, indican que los beneficios y pagos a que hace referencia la demandada son beneficios sociales y asistenciales, que no excluyen que la víctima de crímenes cometidos por agentes del Estado pueda demandar por daños en sede jurisdiccional. Distinguen entre las medidas de satisfacción y las de compensación, argumentando que su acción se encuadra en el segundo grupo.

Aluden a la sentencia de la Excm. Corte Suprema de fecha 15 de noviembre de 2023, recaída en causa Rol N° 157.962-2022.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, plantean que sostener que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil, sería jurídicamente insostenible. Alude al caso “Uribe Tamblay contra el Fisco de Chile” y la sentencia de fecha 29 de agosto de 2022, causa Rol N° 138.662-2020.

Añaden que sostener que el caso de autos está prescrito sería erróneo, toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es, que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas.

Hacen presente que sería un principio jurídico mundialmente reconocido por todas las sociedades democráticas que los delitos de lesa humanidad no prescriben, tanto en su investigación, como en su sanción y reparación.

Respecto al daño y la indemnización reclamada, se refieren a la alegación de la contraria de que para la fijación del daño moral se debería considerar todos los pagos recibidos, a través de los años, conforme a las leyes de reparación. Ante esto, oponen el derecho a una justa indemnización, el cual habría sido reconocido en el ámbito internacional de los Derechos Humanos, como en la jurisprudencia nacional.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

Finalmente, en cuanto a los reajustes e intereses, plantean que estarían conforme a derecho, puesto que el Tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización. En cualquier caso, añaden serían soberanos los tribunales para determinar el momento desde el cual se reajustan y devengan los intereses.

Con fecha 30 de noviembre de 2023 el Fisco evacua la réplica, ratificando la totalidad de sus defensas.

Con fecha 23 de abril de 2024 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del examen de los escritos de discusión, fluye que la tesis fáctica propuesta, respecto de la detención ilegal y torturas sufridos por Víctor Guillermo Hanna Ruz, producto de la acción de agentes del Estado, verificadas durante el denominado “Régimen Militar” o simplemente “La Dictadura”, son hechos no controvertidos.

En línea con lo anterior, no se rebate que por esos motivos el actor fue calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, asignándole el número 3907.

Por lo tanto, se tiene por establecido definitivamente y desde ya que Víctor Guillermo Hanna Ruz fue víctima de detención ilegal y torturas desde el 17 de septiembre de 1973, por alrededor de 30 días, producto de la acción de agentes del Estado, siendo dicho acto constitutivo de un crimen de lesa humanidad.

SEGUNDO: Que, no obstante, se debe consignar que la parte demandante rindió la siguiente prueba.

Instrumental.

Folios 1 y 23.

1.- Copia de las páginas 1 y 78 de la nómina de personas reconocidas como víctimas, elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en la segunda de las cuales aparece el nombre de Víctor Guillermo Hanna Ruz junto al número 3907.

En folio 23.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

1.- Copia de carpeta de antecedentes entregados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el reconocimiento de la calidad de víctima del sr. Hanna Ruz, timbrada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 18 de marzo de 2010.

En lo atinente a la litis, se aprecia una declaración escrita de Víctor Guillermo Hanna Ruz, indicando una fecha de detención correspondiente al 19 de septiembre de 1973, y como fecha de la libertad el 20 de noviembre de 1973 (2 meses). Se incluye anotaciones relativas a los lugares de reclusión y afectaciones de la víctima, similares a las narradas en el libelo de autos.

Se acompaña en dicha carpeta un extracto del libro: “La Verdad Histórica – El Ejército Guerrillero”, cuyo autor sería Manuel Contreras Sepúlveda, en cuya página 456 se observa un listado de nombres de prisioneros, en el que se encuentra “Víctor Hanna Ruz”.

2.- Copia de un documento denominado: “Informe Psicológico – Efectos de la Prisión Política y Exilio”, emitido en febrero de 2024 por el Programa de Salud y Atención Integral en Salud (PRAIS), del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que aparece suscrito por Camila Urrea Arias, psicóloga, quien examina al actor e indica las consecuencias psicológicas que ha sufrido, producto de la tortura, detención y persecución sufridas.

Se explica la metodología y los antecedentes de los hechos represivos, consignándose una declaración del sr. Hanna Ruz, parecida a la versión de la demanda.

Para el diagnóstico se toma en consideración distintas vulneraciones, como “prisión ilegítima por un mes y una semana”, golpes, interrogatorios, privación de alimentos, entre otros.

El entrevistador plasma los alcances de su evaluación psicosocial, postulando que se habría producido un daño moral, además de listar las distintas afecciones de salud que actualmente padecería el sr. Hanna Ruz, indicando que “no se descarta la posibilidad” que algunas de ellas puedan estar relacionadas con la experiencia represiva y el exilio sufrido.

Concluye su reporte indicando que el estrés postraumático y el trauma psicosocial son consistentes con el relato y las expresiones del malestar del evaluado, en su calidad de víctima.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

4.- Copia de un documento –aparentemente- emanado del Gobierno Italiano, completamente en dicho idioma, en donde es posible apreciar el nombre de Víctor Hanna Ruz.

5.- Copia de documento emanado del Consulado General de Chile en Suiza (Zurich), de fecha 19 de diciembre de 1983, dirigido al dr. Víctor Guillermo Hanna Cruz, en virtud del cual se le informa que fue autorizado a volver a Chile.

6.- Copia de un artículo denominado: “Psicopatología del Exilio”, que aparece escrito originalmente en 1984 y publicado en 1989 por el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).

7.- Copia digital de documento denominado: “*Norma Técnica N° 88 para la Atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973 – 1990*”, emitido por la Subsecretaría de Salud Pública – División de Prevención y Control de Enfermedades.

8.- Copia de los capítulos V y VIII del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominados: “*Métodos de tortura: definiciones y testimonios*” y “*Consecuencias de la prisión política y la tortura*”, respectivamente.

Testimonial.

Folio 31.

1.- Olga Cristina Bascuñán Parraguirre, quien declara conocer al demandante desde el año 1956, aproximadamente, ya que fue compañero de universidad de su ex cuñado. Indica que siempre mantuvieron contacto de alguna manera, en reuniones o eventos familiares, y que así fue como se enteró de que había sido detenido por Carabineros en el Hospital Sótero del Río.

Señala que fue llevado a un Cuartel de Investigaciones, y al cabo de uno o dos días al Estadio Nacional, donde fue golpeado y torturado. Explica que estuvo dos meses ahí y que salió muy mal. Indica que posteriormente debió salir del país, en calidad de refugiado, por su propia seguridad.

Explica que al momento de los hechos ocupaba el cargo de Subdirector Médico del Hospital Sótero del Río, gozando de una beca. Agrega que estuvo fuera del país, en Suiza, y que debido a una prohibición de ingreso al país, se vio separado de su mujer, ya que ella quería regresar y el debió quedarse allá.

Cuenta que en el año 1985 fue autorizado finalmente para volver.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

Reseña que los daños que el sr. Hanna Ruz sufrió producto de las detenciones, torturas y exilio, fueron principalmente las crisis de pánico y el insomnio que le afecta, además de la pérdida de su trabajo y la separación con su familia e hijos.

Se refiere a continuación al daño desde el punto de vista familiar y particularmente con su pareja, ya que ella lo habría culpado de haber tenido que dejar el país, agregando que el demandante habría terminado por sentirse culpable de la situación, quedando alejado de sus hijos.

Agrega que el demandante actualmente tiene 82 años y que tuvo que seguir trabajando, por no haber tenido cotizaciones durante el tiempo que estuvo en el extranjero.

Concluye indicando que esta persona le fue contando los hechos de manera parcial, su detención, haber sufrido golpes y haber visto a otras personas en muy mal estado.

2.- Rubí Isabel Elsita Maldonado Parada, quien señala haber conocido al sr. Hanna Ruz cerca del año 1970, en el contexto de la iniciativa de un tren de salud que recorría el sur de Chile y donde el dr. Hanna se encontraba trabajando. Menciona una serie de atributos positivos del demandante.

Refiere que durante el golpe de Estado, empezó a conocerse la represión infligida a los médicos, asesinados, exonerados, torturados y exiliados, entre los cuales se encontraba el dr. Hanna. Explica que éste figuraba haber estado en el Estadio Nacional, siendo despedido de su trabajo, aludiendo también a distintas torturas y haber pasado hambre y frío durante ese período.

Señala que en el año 1980, toda esa información se oficializó en el Colegio Médico, donde ella trabajaba, quedando registrada en la Comisión de la Solidaridad. Manifiesta que en los años 1985-1986 el demandante vuelve a Chile, comenzando a trabajar con él como anestesista, por cerca de 30 años, teniendo oportunidad de comentar las situaciones vividas y otros padecimientos, como el tener menos sueldo o jubilación, como consecuencia de haber sido exiliado.

Se pronuncia respecto de los daños morales, psicológicos, familiares y sociales sufridos, destacando unas taquicardias o desmayos que terminaron siendo un síndrome post traumático del terror. Agrega que tuvo que dejar su proyecto de vida abandonado, la beca de medicina interna, y que a su edad había logrado ser subdirector médico del Hospital Sótero del Río.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

Agrega que en el exilio se vio forzado a cambiar su especialidad, convirtiéndose en anestesista.

Se refiere al daño familiar sufrido, señalando conoció al sr. Hanna Ruz cuando era joven, con dos niños, y que esa familia se destruyó rápidamente, también por el exilio. Asimismo, que en el año 1983 autorizaron su regreso, pero no a todo el grupo familiar, lo que motivó la separación de la familia en Suiza, perdiendo a sus hijos.

Explica también que el demandante ha tenido que seguir trabajando pese a su edad, ya que las ayudas económicas a los exiliados y reprimidos no son suficientes para sostenerse. Añade que existe una sensación de injusticia por todo lo que le pasó.

En cuanto a los detalles de su detención, indica que el actor no se los ha contado todos, puesto que es una persona reservada, pero que si le habría revelado que fue amarrado, que lo encapucharon, que fue golpeado con puños y armamentos y que incluso le habían aplicado electricidad y amenazado con fusilarlo.

TERCERO: Que, además, consta el oficio ORD. DSGT N° 4792-18176 del Instituto de Previsión Social, de fecha 1 de diciembre de 2023, que informa sobre “beneficios de reparación” pagados a Víctor Guillermo Hanna Ruz.

En este oficio se comunica que el demandante, por ser víctima de Prisión Política y Tortura (Valech), recibe beneficios de reparación de las Leyes N°s 19.992 y 20.874.

Se especifica en que Víctor Guillermo Hanna Ruz ha recibido por concepto de pensión Ley N° 19.992 la suma de \$29.395.508; por concepto de bono Ley N° 19.992 la suma de \$3.000.000; por concepto de aporte único Ley N° 20.874 la suma de \$1.000.000; por concepto de aguinaldos la suma de \$470.667; siendo el total pagado \$33.866.175 y la pensión actual de \$277.270.

Se indica, también, que el demandante no ha recibido otros beneficios de reparación o previsionales en ese instituto.

CUARTO: Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

instrumentos señalados el valor probatorio que la propia Ley les atribuye, según su naturaleza, salvo el documento acompañado en idioma italiano, sin traducción, al que no se conferirá valor alguno.

En efecto, la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio corresponde hacerla en la forma dispuesta por el legislador. Por tanto, respecto de los instrumentos públicos, se advierte que emanan o fueron autorizados por un funcionario público, actuando en tal carácter y en materias de su competencia, contando con las formalidades que señala la ley, sin que la circunstancia de ser una copia les reste valor, precisamente por no haber sido impugnados.

De esta manera, los instrumentos públicos acompañados hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, gozando de una verdadera presunción de autenticidad.

De cualquier manera y en una perspectiva general, se percibe como un hecho público y notorio que existe en la sociedad un consenso mayoritario acerca de que efectivamente se violaron los Derechos Humanos de muchas personas durante el gobierno autoritario del Gral. A. Pinochet, conforme dan cuenta las condenas que se han sucedido desde que el país retomó el sendero democrático.

Por lo tanto, coherente con la defensa desplegada por el Fisco, no hay motivo serio y grave para dudar acerca de la verdad de los hechos relatados en estos informes, especialmente los confeccionados por la Comisión Valech, acompañados –en lo pertinente- en copia.

Mención especial merece la testifical producida, consistente en los dichos de Rubí Isabel Elsitá Maldonado Parada y Olga Cristina Bascuñán Parraguirre, que si bien coinciden en lo medular, como la fecha y período de la detención del sr. Hanna Ruz (sin perjuicio que indican como duración de la detención “dos meses”, mientras que en la demanda solo se habla de uno), sin embargo, dejan ver varias incongruencias, especialmente respecto del tiempo posterior a la aprehensión. Así, la sra. Maldonado Parada indica (respecto al demandante) que: *“(…) El recibió una carta en su casa en Suiza, lugar hasta donde se refugió, en que se le indicaba que tenía prohibición de ingreso al país, eso significó una separación con su mujer, **dado que ella quería regresar y él debió quedarse allá (…)**” Finalmente en **el año 1985** se le autoriza a regresar al país”,* mientras que en la demanda se relata que fue el sr. Hanna Ruz quien volvió por su cuenta al país, por no contar el resto de su familia con la autorización respectiva.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

Por otro lado, la sra. Bascuñán Parraguirre desliza otros detalles discordantes, como el caso de la afirmación relativa a que el sr. Hanna Ruz se vio obligado a seguir trabajando hasta el día de hoy, en circunstancias que éste expresamente señala haber jubilado a sus 77 años, o bien, cuando indica que le “parece” que el demandante habría sido víctima de torturas tales como “simulacro de fusilamiento” o aplicación de corriente en su cuerpo, en circunstancias que no denuncia tales tormentos en su demanda.

Debido a estas inconsistencias y por no poder determinarse qué versión es la correcta, se preferirá la contenida en la demanda, *no impugnada por la parte demandada*, a la vez que se restará valor probatorio a la testimonial, conforme se autoriza en la legislación.

QUINTO: Que, en cuanto a las excepciones de reparación integral y pago opuestas por el Fisco, debe decirse que esa parte únicamente presentó el oficio descrito en el considerando tercero. Con todo, la defensa del actor no contravino que hayan recibido los beneficios y transferencias que señala el Fisco en su contestación, por ser una consecuencia necesaria del hecho de haber sido incluido en la nómina del informe realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que el hecho fundante de la responsabilidad pretendida es un delito de lesa humanidad, esto es, aquellos actos que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad considera cometidos “*como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque*”, incluyendo asesinato, exterminio, prisión arbitraria, violación, tortura, persecución política, desaparición forzada y otros actos inhumanos graves, calificación jurídica que no fue objeto de debate entre las partes, motivo por el cual se debe atender a los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, integrados a nuestra legislación interna por disposición del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de las víctimas y otras personas a obtener la reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, puesto que “*el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana*”.

En este sentido, conviene recordar que los artículos 1.1 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, publicado el 5 de enero de 1991, establecen lo siguiente:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Por lo tanto, se constata una clara divergencia entre el contenido de las excepciones señaladas y lo dispuesto por la Convención Americana, debiendo estarse a esta última, atendida la naturaleza del ilícito, por cuanto la responsabilidad del Estado queda sujeta -en estos casos- a las reglas del derecho internacional, que excluyen –en todo aquello que sean contrarias a éste- las del derecho interno.

En consecuencia, atendido además que las leyes invocadas por la defensa fiscal no establecen verdaderas indemnizaciones sino que un conjunto de derechos y/o beneficios para las víctimas y sus familiares, como ocurre con las pensiones de reparación, medidas con las que el Ejecutivo y el Legislativo han intentado progresivamente hacerse cargo de un problema esencialmente humanitario, político y, en definitiva, histórico, no se avizora la existencia de incompatibilidad alguna con la indemnización pretendida en sede judicial, por ser diferente, siendo importante consignar que no está prohibido otorgarla y que así se ha hecho en múltiples sentencias.

SEPTIMO: Que, en base a los mismos argumentos, debe agregarse que la imprescriptibilidad de la acción penal trae como consecuencia la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción civil, producto del transcurso del tiempo, desde que el hecho generador de la responsabilidad es al mismo tiempo un delito de lesa humanidad, vale decir, no un ilícito civil cualquiera. De otra manera resultaría que se permite perseguir en todo tiempo y lugar estos crímenes, pero no así la responsabilidad civil, lo que no se entiende si se considera que evidentemente la responsabilidad penal es de mayor entidad que la patrimonial.

Por lo tanto y como este Tribunal ha señalado en pronunciamientos anteriores, aplica aquello de que quien puede lo más, puede lo menos, no



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

pareciendo razonable un sistema que desintegre las responsabilidades que emanan de un mismo hecho, cuando éste tiene la connotación aludida con anterioridad.

OCTAVO: Que, así las cosas, descartadas las excepciones opuestas por la demandada, cabe destacar que el daño moral ha sido conceptualizado por la Excma. Corte Suprema como: *“un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos”* (R.D.J., T. LXVIII, secc. 4ª, pág. 168). Asimismo, ha sentenciado lo siguiente: *“Que el daño moral, como todo daño, debe ser probado por quien sostiene haberlo padecido; al menos cuando es la base de la obligación de repararlo, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Sin embargo, en determinadas situaciones, por la naturaleza y características del daño material producido, particularmente cuando se trata de daño corporal, el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo. Así también ha sido resuelto (por ejemplo, Corte Suprema, rol 735-2015). En estas circunstancias se produce una alteración del peso de la prueba en cuanto, debiendo la víctima probar el daño, es el demandado quien tendría que probar que, debido a ciertos hechos o circunstancias, la víctima no sufrió efectivamente el daño que postula”* (Rol N° 12.176-2017).

Pues bien, el presente caso es justamente uno de aquellos en que *“el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo”*. En efecto, se trata del caso de un médico que fue detenido ilegítimamente en su lugar de trabajo –el Hospital Sótero del Río–, por funcionarios de Carabineros, un día después del quiebre institucional, siendo aprehendido nuevamente unos días después por funcionarios de Policía de Investigaciones, mientras atendía pacientes, y llevado finalmente al Estadio Nacional, donde dice haber permanecido privado de libertad por cerca de un mes (*en la carpeta de antecedentes se indica dos meses*), tiempo en que habría sido golpeado e interrogado, pasando hambre y frío.

Fue un período de abusos, tormentos y desinformación, que han dejado una huella en esta persona, en línea con el concepto de tortura de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST) de 1985: *“Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica” (arts. 2 y 3).

Posteriormente y como consecuencia de una sensación de inseguridad importante, tomó la decisión de abandonar el país junto a su familia: *“Todo este ambiente de inseguridad y miedo, además de estar sin trabajo, ya que, habiendo yo terminado mi formación como Médico Internista debía ser contratado en un hospital cabecera de provincia, hizo que tomáramos la decisión, en noviembre de 1973, de pedir asilo junto con mi familia en la Embajada de Italia (...)”*, situación que se mantuvo hasta el año 1983, cuando decide volver a Chile.

Tales tratos, por cierto degradantes, que son consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, cuyo deber funcionario en ningún caso ni momento validó la adopción de procedimientos y medidas como las operadas en esta persona, abusando de una posición de poder y engendrando en la víctima una sensación de vulneración, despojo e incertidumbre persistente, que razonablemente no pueden tenerse como inermes o carentes de carga emocional, son un elemento definitivamente esclarecedor de lo que podría retratarse como una auténtica desdicha personal, por lo que al tenor de lo que disponen los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se presume que el actor fue lesionado en su esfera inmaterial y en magnitud considerable, puesto que los abusos que sufrió fueron más allá de simples amenazas y golpes, repercutiendo incluso en su salud cardiovascular.

No podría concluirse de otra manera, desde que el Estado de Chile ha reconocido oficialmente al demandante como víctima de prisión política y tortura, a partir de lo cual y en conjunto con los otros antecedentes adjuntados al proceso y, especialmente, que estos hechos no fueron cuestionados en el juicio en cuanto a su ocurrencia, solo cabe creer en la versión entregada, y en relación al dolor moral invocado, tenerlo por serio y grave, por no poder esperarse otra cosa.

Pues bien, conforme al juzgamiento efectuado por el Tribunal de los hechos narrados y la afectación del demandante en su dimensión espiritual, que se aprecia como permanente, se concluye en justicia el otorgamiento de una satisfacción de reemplazo, que en prudencia y equidad, a la luz del mérito de los antecedentes, especialmente, la duración de la privación de libertad (un mes) y los tormentos infligidos, sin olvidar la pérdida de su trabajo y posterior salida del país, entre otros hechos perniciosos, se determina en la suma única y total de \$50.000.000, que se deberá pagar más reajustes, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor por el periodo que media entre que la presente



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF

«RIT»

Foja: 1

sentencia se encuentre ejecutoriada y el pago efectivo e intereses corrientes desde la constitución en mora.

NOVENO: Que no se condenará en costas a la parte demandada, por estimarse que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República; I. b) de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 1437, 1698, 1699, 1700, 1702, 1706, 2314 y siguientes, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 170, y 342 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Que se rechazan las excepciones de reparación integral, pago y prescripción alegadas por la parte demandada.

II. Que se acoge la demanda, solo en cuanto se condena a la parte demandada a pagar \$50.000.000 al demandante, por concepto de indemnización por daño moral, más reajustes e intereses.

III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-17.820-2023

DICTADA POR DON MATIAS ANDRES FRANULIC GOMEZ, JUEZ TITULAR DEL VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintinueve de Abril de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVWZXNRLSXF